

Manifiesto por Madrid. Crítica y crisis del modelo metropolitano*

Madrid se ha convertido en una metrópolis global y en una máquina de crecimiento sólo equiparable a unas pocas ciudades más del planeta. Pero el despegue madrileño se ha construido de manera muy ambigua. El Madrid del éxito empresarial no se ha hecho sin costes sociales; en esencia, el Madrid global se ha construido sobre una sociedad definida por la precarización del trabajo y caracterizada por la mano de obra femenina y migrante super-explotada. Es una ciudad que tiende a polarizarse. Trataremos de esbozar en este texto los mecanismos de maduración del Madrid actual en su construcción como ciudad global polarizada, donde la clase política ha permitido que el ciclo inmobiliario y las privatizaciones se apoderasen de la ciudad.

Cuando nos acercamos a Madrid desde cualquier carretera de su arco norte, lo que más llama la atención son los rascacielos que en los últimos años se han abierto paso en el polucionado cielo de la ciudad. Esta primera visión se completa con las nuevas dimensiones que ha adquirido la ciudad, ensanchando su perímetro con grandes ampliaciones urbanas, polígonos logísticos, macroespacios comerciales y con todas las infraestructuras de comunicación que este crecimiento lleva aparejadas. Unos indicadores que a simple vista nos desvelan que Madrid se ha convertido en una metrópolis global y en una máquina de crecimiento sólo equiparable a unas pocas ciu-

Observatorio
Metropolitano,
colectivo
formado por
activistas sociales
dedicado a la
investigación de
la metrópolis
madrileña

* LICENCIA CREATIVE COMMONS

Atribución-Compartir igual 3.0 España

Usted es libre de: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra; hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra)..

Compartir bajo la misma licencia . Si transforma o modifica esta obra para crear una obra derivada, sólo puede distribuir la obra resultante bajo la misma licencia, una similar o una compatible.

* Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.

* Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

* Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

© 2009, del texto, Observatorio metropolitano. © 2009, de la edición, Traficantes de Sueños.

dades más de este planeta. Nos encontramos, por tanto, ante un modelo exitoso de crecimiento que las autoridades políticas y económicas no han dudado en enarbolar a la hora de utilizar el modelo de Madrid como estandarte del éxito y la prosperidad dentro del marco estatal, donde no encuentra competidores, y del europeo donde sólo se puede comparar con ciudades como Londres, Milán o París.

Pero el despegue madrileño se ha construido de manera muy ambigua. Por un lado podemos ver el Madrid del éxito empresarial, avalado por las sedes de grandes empresas multinacionales del sector de las comunicaciones como Telefónica, de la energía como Repsol, Endesa o Unión Fenosa, de la construcción como Ferrovial, FCC y ACS o del financiero como el Banco Santander o el BBVA (23 de las 30 mayores multinacionales españolas están en Madrid). Por otro, vemos que la implantación de esta locomotora económica no se ha hecho sin costes sociales; quizás este es el aspecto menos tratado cuando se habla del espectacular crecimiento de Madrid ya que, en esencia, el Madrid global se ha construido sobre una sociedad definida por la precarización del trabajo y caracterizada por la mano de obra femenina y migrante superexplotada. En Madrid más que en otros lugares se ha podido apreciar cómo las nuevas formas de gobierno y gestión de lo público o las líneas de ordenación y expansión urbanas han definido las coordenadas estratégicas de una ciudad que tiende a polarizarse. Siguiendo estos pasos, trataremos de esbozar en este texto los mecanismos de maduración del Madrid actual en su construcción como ciudad global polarizada, donde la clase política ha permitido que el ciclo inmobiliario y las privatizaciones se apoderasen de la ciudad.

El Madrid global. Trazos de una ciudad polarizada

Efectivamente, los rascacielos son sólo la advertencia de un modelo de producción de ciudad donde todos los aspectos de la vida urbana (grandes infraestructuras, relaciones sociales, instituciones políticas y servicios sociales) se ponen al servicio de un modelo de crecimiento. En consecuencia, la sociedad madrileña se ha construido a imagen y semejanza de este modelo en el que encontramos, de un lado, cerca de un 15% de la población que recibe una remuneración anual de más de 60.000 euros, algunos de ellos alcanzando cifras hasta 100 veces mayores y, de otro lado, a más de un millón de personas que, vinculadas a contrataciones precarias y trabajos descualificados, no llegan a los 15.000 euros anuales. Estas cifras no son sino el reflejo de las dos caras de Madrid, una vinculada al mando global: altos ejecutivos, servicios avanzados a las empresas (informática, publicidad, consultoría) y otra donde el empleo se define por los bajos salarios, la fragilidad y la sobreexplotación. Los sueldos de menos de 1.000 euros mensuales recaen sobre la población joven, migrante y sobre las mujeres que desarrollan las labores de abastecimiento, mantenimiento e intendencia de la sociedad opulenta que habita la *global class*.

Por lo tanto, el despegue de Madrid se ha sustentado en el reparto masivo de empleo de baja cualificación y remuneración a una mayoría de la población que, en distintos grados, ha tenido que afrontar la contradicción de vivir en una ciudad impregnada por el éxito, donde el consumo de viviendas, la adquisición de activos financieros y bursátiles, la compra de automóviles, viajes y los bienes de equipo estaban al alcance de la mano, pero donde la capacidad adquisitiva no la marcaban los salarios sino la capacidad de endeudamiento de estos mismos. Este nuevo horizonte ha permitido a las familias participar directamente en el modelo capitalista mediante la compra de una pequeña porción de sus activos financieros y, de manera mayoritaria, invirtiendo en el crecimiento de la ciudad con la compra de vivienda, que de bien básico ha pasado a convertirse en un bien de inversión. Este modelo no sólo ha alcanzado a las familias de rentas más altas, sino que ha tocado a multitud de familias de rentas medias y medias-bajas que, con la ilusión de invertir en bienes amortizables en un futuro, han endeudado sus economías e hipotecado sus vidas.

En los últimos años sólo hemos visto emerger un modelo de crecimiento desigual que ha puesto en evidencia el despotismo de las estructuras económicas y su clase dirigente

El consumo de suelo en Madrid, atenazado por un ciclo inmobiliario muy agresivo, ha hecho que la ciudad haya estallado por sus cuatro costados y haya desarrollado modelos urbanos de crecimiento diseñados para todas y cada una de las tipologías sociales que se embarcaban en la compra de viviendas. Desde los barrios residenciales de chalets del noroeste de Madrid (Las Rozas, Pozuelo, Majadahonda, etc.) hasta las ampliaciones urbanas para las clases medias en el sur y el norte de la ciudad (Ensanche de Vallecas, Montecarmelo o Las Tablas) y las muchas ciudades aledañas del cinturón obrero de Madrid (Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Parla, etc.). Pero, lo cierto es que este crecimiento también ha venido acompañado de un crecimiento urbano desigual, ya que mientras los desarrollos de las zonas de la ciudad de mayor renta han visto crecer a su alrededor las universidades privadas, los campos de golf y los complejos sanitarios y educativos privados y elitistas, las periferias de menor renta se han visto rodeadas de centros comerciales y de ocio, pero nunca de los proporcionales servicios públicos (escuelas infantiles, institutos, dotaciones sanitarias) necesarios para su desarrollo, quedando borradas del mapa las políticas públicas que la clase política debería haber puesto en marcha para corregir esta polarización.

Muy al contrario, en los últimos años no sólo hemos visto emerger un modelo de crecimiento desigual que ha puesto en evidencia el despotismo de las estructuras económicas y su clase dirigente, siempre enfocadas a la extracción del máximo rendimiento, sino que hemos asistido a la connivencia de las instituciones públicas –que debían haber velado por

la redistribución de la renta, la protección de los derechos de los menos favorecidos y de los servicios más básicos— con las grandes empresas. La destrucción de las estructuras públicas se ha producido gracias a una forma de gobierno concertado entre las élites políticas y económicas que ha tenido su mayor exponente en los procesos de fagocitación de la enseñanza, la sanidad pública y los servicios sociales por parte de los intereses del mercado y el sector privado.

El Partido Popular de Madrid. Un experimento político

Una vez definidos los parámetros del modelo urbano capitaneado por esta nueva oligarquía, nos tocaría entrar más detalladamente en el papel que ha jugado la clase política en la construcción de todo este entramado. La premisa central es que la oligarquía madrileña ha encontrado en la clase política a su mejor aliado para generar un medio ambiente gubernamental favorable a su modelo de crecimiento: el Partido Popular madrileño, con Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre a la cabeza, han sido sus más fieles defensores. Las convicciones neoliberales de ambos candidatos han convertido al Partido Popular en la mejor plataforma política para el desarrollo del Madrid global, ya que se ha encargado de construir una hegemonía política que permitiese gobernar sin adversarios la sociedad madrileña.

En un proceso no premeditado de ingeniería política, el Partido Popular de Madrid ha conseguido en la última década hacerse con la mayor parte del espectro electoral madrileño, afianzando a su electorado clásico, y atrayendo para sí a gran parte del electorado liberal del PSOE. Esta ocupación del nicho electoral del PSOE se ha hecho gracias a la conjunción de diversos mecanismos. El primero de ellos, sería la operación política de Alberto Ruiz Gallardón que, con un nuevo espíritu político de aspecto dialogante, ha sabido traspasar la fina capa de separación que en materia económica divide a ambos partidos, manteniendo siempre posturas distantes con la línea más moral y neoconservadora de su partido en cuestiones como los matrimonios homosexuales, las relaciones con la iglesia o tras la guerra de Iraq. En una suerte de carambola histórica, Gallardón ha conseguido deshacer el manto gris que rodeaba a la derecha madrileña, con Álvarez del Manzano como telón de fondo, y abrir el Partido Popular a un nuevo electorado liberal con ciertas tradiciones progresistas. Esta nueva ética neoliberal se ha conjugado con el declive de la Federación Socialista Madrileña, embarcada en los últimos años en numerosas disputas internas que la han dejado sin candidatos creíbles y al albur de una nueva derecha madrileña que paulatinamente ha ido mostrando su cara más agresiva.

No obstante, esta brecha electoral abierta por Gallardón no ha sido ensanchada y aprovechada en todas sus capacidades hasta 2003. En ese año, Esperanza Aguirre

amparada en el “tamayazo” que, además de corroborar el peso del sector de la construcción sobre la política, destapó las vergüenzas de los socialistas madrileños, irrumpía en la vida pública madrileña tras años de mediocres actuaciones. La lideresa mostró desde ese momento una inesperada capacidad de dar la vuelta a la política de guiños del Partido Popular de Gallardón y encabezar el estilo de aires *neocón* del último Aznar, enredándose con los *think tanks* más avanzados de la derecha hispana tanto en su versión política como en su versión mediática (FAES, Real Instituto Elcano, Libertad Digital, El Mundo y, por supuesto, Telemadrid, etc.). De este modo, la apuesta de Aguirre se ha encaminado a afianzar una guardia pretoriana política y social basada en la agitación y la agresividad, sin descartar espionajes ni corruptelas, que pusiese todos los aspectos de la vida social al servicio de la maquinaria productiva de la oligarquía madrileña. Esta batalla por endurecer la política, que ha defendido en las filas de su propio partido frente a un Gallardón que ha quedado en varias ocasiones contra las cuerdas, se ha reflejado en todas sus actuaciones siempre dirigidas a favorecer la contratación de servicios privados en materia de sanidad, educación y servicios sociales, entre otros, que ha tenido como objetivo el favorecer los intereses de las grandes empresas y de generar, a nivel micro, una compleja red clientelar que entremezcle a organizaciones sociales afines (las ONG ultracatólicas, por ejemplo), cuadros políticos de su confianza, empresas y universidades privadas, generando así una sociedad civil creada desde arriba y que pueda servir de ariete a pie de calle para contrarrestar posibles disidencias políticas.

Por sólo citar un ejemplo en este campo de ingeniería política desde arriba, podemos señalar que en 2009 el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, controlada por la esperanzista Concepción Dancausa, ha conseguido poner patas arriba los planes de inmigración del Ayuntamiento, haciendo lo propio en la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, para ceder gran parte del control de esos servicios sociales a organizaciones como la Fundación Altius, dependiente de la Universidad Francisco Vitoria que, como centro de formación vinculado a la derecha ultracatólica, se encargará en un futuro inmediato de la formación de cuadros que nutran las ONG y fundaciones de la derecha clientelar que gestione los servicios sociales de Madrid, en ese afán de crear estructuras políticas que impregnen todo el tejido social.

En conjunto, y aunque sólo se pueden mencionar de forma somera, la revolución de las prácticas y discursos de mando que caracterizan el experimento del modelo Madrid parece tener como propósito no sólo lograr un gobierno “cómodo y flexible”, adaptado a las nuevas funciones de la posición global de la ciudad, sino también producir una sociedad plenamente adaptada a eso que los neoliberales llaman “mercado”. Es decir, una realidad social convertida en campo abonado para los dispositivos de explotación del nuevo bloque oligárquico; sirvan de ejemplo el devenir de los servicios públicos y el uso del territorio y los recursos naturales.

Los servicios públicos. Nuevos nichos de mercado

A medida que la máquina de explotación madrileña ha ido agotando los caladeros del crédito y el negocio inmobiliario, se han abierto nuevos nichos de mercado que redundan en un expolio de los recursos comunes. En línea con las recomendaciones de la OMC y los discursos neoliberales, el gobierno Aguirre ha puesto en venta los activos y servicios que otrora componían las principales partidas del Estado del Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. La privatización se está desarrollando bajo el paraguas de la subcontratación: nuevos hospitales bajo la fórmula PFI, aumento del concierto escolar y subcontratación explícita de los servicios sociales.

Los nuevos hospitales se han construido bajo un sistema de gestión público-privada emulado del Reino Unido (PFI, Private Financial Initiative), posible gracias al Real Decreto Ley 10/1996 y a la Ley 15/1997, que contó con el voto favorable del PSOE. Ya antes se habían dado pasos importantes con la externalización de servicios básicos no sanitarios (limpieza, comida, transporte de ambulancias, seguridad, etc.). Este modelo consiste en ceder a una o varias empresas la construcción, mantenimiento y contratación o subcontratación de determinados servicios sean estos sanitarios (como puedan ser los laboratorios) o no (como la gestión administrativa, que incluye el manejo de las historias clínicas de los pacientes). El modelo de gestión PFI puede ser la antesala de un sistema completamente privado (desde la titularidad hasta la contratación de personal sanitario), que ya se está experimentando en el nuevo hospital de Valdemoro, y que se quiere implantar en otros cuatro nuevos hospitales (Carabanchel, Villalba, Móstoles y Torrejón) así como en buena parte de la Atención Primaria (réplica del modelo Fundación Jiménez Díaz/CapioSanidad). La conclusión obvia es que las decisiones serán tomadas con criterios empresariales antes que sociales: las ratios de personal por paciente son mucho menores que en los antiguos hospitales públicos; el personal sanitario está siendo “recolocado” de los viejos a los nuevos hospitales, sin que por ello se amplíe su número; los nuevos hospitales no tienen el tamaño crítico (la mayoría son demasiado pequeños) para albergar la mayor parte de las especialidades; las externalizaciones de servicios como la limpieza repercuten en una mayor incidencia de epidemias en los centros sanitarios, etc. Tampoco suele decirse que en los países pioneros de la “fórmula PFI”, como en Escocia, algunos centros han sido “recuperados” por el sector público. Y es que el supuesto ahorro presupuestario puede ser también completamente falso. La comunidad autónoma tiene que hacerse cargo de la financiación general del hospital, mediante el pago de un canon anual, que incluye los gastos de gestión así como el normal “beneficio” para las empresas y una parte destinada a sufragar el coste de la construcción de la infraestructura, siempre con unos intereses altísimos (más altos que si el crédito hubiera sido solicitado por un ente público), durante un periodo de 30 años. El resultado de todo esto, tal y como demuestran los estudios realizados, es que los nuevos hospitales PFI salen más caros por paciente que los viejos hospitales de la red pública. La dife-

rencia estriba en que lo que antes aparecía en la partida de gastos sanitarios pasa a contabilizarse como pasivo y pago de intereses. Entonces, ¿cuáles son las razones para animar semejante reforma? Un motivo es el mismo que en el caso de la obra pública en general: posibilitar la obtención de beneficios a empresas privadas a través de la transferencia de dinero público. Y también los beneficiarios son prácticamente los mismos: así, FCC y Caja Madrid se han hecho cargo del hospital de Arganda, Sacyr Vallehermoso de los de Coslada y Parla, Dragados del de Majadahonda, Acciona del de San Sebastián de los Reyes, Apex Partners del de Valdemoro, Hispánica del de Aranjuez y Begar del de Vallecas. Y no sólo del hospital, sino también de algunos servicios tan rentables como la cafetería o el parking. Otros experimentos se vienen sumando, así, por ejemplo, dos centros de especialidades (Pontones y Quintana) han sido ya vendidos a una entidad privada y por su lado, en la atención primaria se pretende pasar a un sistema área única en la que los usuarios (o clientes) puedan elegir entre centros públicos y futuros concertados con financiación pública; esto imposibilita saber cuántos pacientes se tendrán a lo largo del año y por tanto dificulta la planificación (y no hablemos de la prevención o de una intervención integral) mientras que por el lado contrario puede llevar a “motivar” a la gente al uso (y abuso) de los recursos sanitarios en cuanto que los centros cobrarán por personas y procesos atendidos. En resumen, se intenta trasladar el modelo de mercado “libre” a los servicios sanitarios, se deja de mirar por la salud pública y la sanidad pasa a ser un negocio como cualquier otro. Se transferirá dinero público a unos pocos, mientras que el ahorro de costes sólo revierte en el beneficio de las empresas, no en los presupuestos públicos, que quedarán atados al pago de cánones crecientes y que en ningún caso pueden dejar de pagar aunque se precisen otros gastos. Además, se crea empleo más precario y empeora la calidad del servicio, lo que sin duda anima a “pasarse a la privada” y posibilita que lo público se convierta en un servicio residual destinado a aquellas personas y familias que no puedan asumir el coste de la atención privada.

Respecto a la educación pública, a pesar de estar fundada en la necesaria consecución de la igualdad de oportunidades, los colegios concertados llevan ya décadas financiados por el erario público y a la vez provocando una formación diferenciada. El gobierno del PP no se ha caracterizado por su discreción a la hora de apoyar la enseñanza concertada, tal y como señalan medidas recurrentes como la cesión de suelo para centros de titularidad privada en muchos municipios y la capital, los importantes beneficios fiscales de los que gozan estos centros, la crucial omisión de construcción de escuelas públicas en nuevos barrios, etc. De este modo, la enseñanza pública ha ido perdiendo terreno frente a la concertada y privada, hasta el punto de que en Madrid la mayor parte del alumnado acude a escuelas de gestión privada (en el curso 2006-2007 sólo el 37% de los alumnos asistió a un centro público). Si analizamos, sin embargo, el número de alumnos inmigrantes que acuden a la pública, veremos que están sobrerrepresentados: son el doble que los nativos. De otra parte, a esta segregación se han añadido nuevos dispositivos, las Medidas de Atención a la Diversidad,

que si bien deberían facilitar la integración y “poner al nivel”, provocan una fuerte diferenciación interna dentro de los propios centros públicos: muchos migrantes en edad escolar, chicos de grupos sociales “menos favorecidos” y aquéllos que no se comportan en clase como se espera, han acabado siendo derivados a estos servicios. Este modelo educativo convierte la segregación de etnia y clase social en un problema de nivel académico o de disciplina; la gestión de la heterogeneidad en la escuela a través de la diferenciación por nivel apunta hacia un tipo de políticas públicas que ya no se dirigen, ni siquiera de manera formal, a un futuro inclusivo y equitativo.

La realidad parece responder a unas políticas públicas que ya no se dirigen a garantizar derechos sociales y redistribuir recursos sino que funcionan con pequeñas actuaciones para hacer frente a necesidades concretas

También el ámbito de la intervención social ha sido terreno abonado para una progresiva generalización de formas de gestión público-privada, por ejemplo, la gestión de los dispositivos tanto del Plan Madrid del Ayuntamiento como del Plan de Convivencia de la Comunidad de Madrid (Planes de atención a la población inmigrante) ha sido subcontratada a todo un abanico de las ONG, fundaciones y empresas sociales con unas condiciones laborales de absoluta precariedad: salarios bajos, contratos a tiempo parcial, inestabilidad laboral, subcontrataciones a través de empresas o consorcios, etc. De hecho, la consolidación del proceso de externalización ha conducido a una proliferación de organizaciones y asociaciones que compiten ferozmente entre sí y a la conversión del Tercer Sector en un mercado de saldos. Lo cual redundará, como es natural, en una merma no sólo de las condiciones de trabajo sino también de la calidad de las prestaciones. En un mercado en el que sólo se valora el presupuesto más bajo, son las empresas de servicios (bajo la máscara de fundaciones u ONG) las que acaban por quedarse con los principales contratos; se fomenta así la rápida concentración del sector al tiempo que se convierte en otro nicho de negocio. Además, en los dos últimos años se ha emprendido una política de cierres, reducciones de plantilla y cambios en las entidades gestoras; es el caso de los 18 CASI integrados en el Plan Madrid, de los que hoy en día sólo quedan dos, o de otros dispositivos como escuelas de formación, programas de acogida, de atención jurídica o los servicios de mediación intercultural. Evidentemente, los cierres o traspasos de estos dispositivos implican un claro derroche de tiempo, dinero público y capital humano materializado en infraestructuras, formación de profesionales y creación de redes sociales. Además, el nuevo contexto de crisis económica parece que va a acusar aún más estas tendencias.

La realidad parece responder a unas políticas públicas que ya no se dirigen a garantizar derechos sociales y redistribuir recursos sino que funcionan con pequeñas actuaciones,

móviles y flexibles, dirigidas allí donde se detectan riesgos (coyunturales o estructurales), para hacer frente a necesidades concretas (entre las que también se encuentran las clientelares, electorales y propagandísticas). El coste es evidente y catastrófico: una intervención social precarizada y dirigida a la obtención de beneficios sólo llega a ser un “muro de contención” frente a situaciones cada vez más extremas, a la vez que su modelo de subcontratación bien podría ser el espejo en el que la sanidad y la educación se verán un día.

Territorio metropolitano. Auge y caída del ciclo inmobiliario

Si la explosión urbana de la última década ha sido directamente fomentada mediante políticas basadas en el incremento de la oferta de suelo, que argumentaban que la causa del encarecimiento del suelo era su escasez y que la solución a tal problema se encontraba en la liberalización del mercado (la Ley del Suelo autonómica aprobada en 2001, conocida como la “ley del todo urbanizable”, establecía la clasificación de todo el suelo de la Comunidad como urbanizable a menos que una ley sectorial –de Aguas, de Montes, etc.– determinara la necesidad de protegerlo); sobra decir que el resultado de esta política de liberalización ha sido precisamente el contrario: mientras duró la bonanza, a más suelo y más viviendas, mayor precio. La colonización del territorio madrileño no sólo se ha apoyado en una “legislación liberal”, también ha tenido que recurrir –paradojas del (neo)liberalismo– al desarrollo de grandes infraestructuras de comunicación. Todas ellas sufragadas con dinero público y todas ellas realizadas por las grandes constructoras, al tiempo que sobre préstamos a las principales entidades financieras. Sin duda, todo un “progreso”, que ha convertido a Madrid en la ciudad europea con mayor número de kilómetros de autovía por millón de habitantes; en la misma línea encontramos los túneles de la M-30 (realizada por cuatro grandes constructoras, endeudando al municipio para los próximos 30 años) o la M-45 (por la que todos los días la Comunidad paga un “peaje en la sombra” a bancos y constructoras). Como ejemplo de las buenas relaciones entre autoridades públicas y empresas privadas merecen ser recordados los rascacielos del “Centro dotacional Cuatro Torres”: una extraña recalificación sobre el antiguo suelo de las instalaciones del Real Madrid llevó aparejada la consiguiente revalorización de los terrenos, así como sustanciosas plusvalías para el club de fútbol, al mismo tiempo que dichas instalaciones se trasladaban a unos terrenos cercanos al aeropuerto, a su vez comprados a precio rústico, que comprendían lo que en un futuro casi inmediato se iba a convertir en un desarrollo residencial de lujo (Valdebebas). El beneficiario, como no podía ser de otra manera, no ha sido sólo el Real Madrid, sino especialmente la empresa de su antiguo presidente, ACS, que además de construir algunas de las nuevas torres, también construirá el nuevo barrio de Valdebebas, colindante con la nueva ciudad deportiva.

¿Qué resultados ha dejado esta década larga de desarrollo ininterrumpido? Si durante estos años, los ayuntamientos y la comunidad podían invertir en infraestructuras, “regalar”

dinero a espuestas a constructoras y promotoras, y confiar aún así en que el crecimiento proporcionaría nuevas entradas fiscales, la coyuntura actual es bien otra. Sin movimientos de compra-venta de suelo y sin obras, los municipios hace ya tiempo que han dejado de ingresar. Y como a las familias que creyeron invertir al comprar una vivienda por encima de sus posibilidades, lo único que queda ahora es la deuda. Así, el valor de los intereses de una ciudad de buen tamaño como Alcorcón alcanza el 45% de su presupuesto, mientras que en un municipio como El Álamo supone el 86%. Y en un contexto de crisis, ¿qué otra cosa pueden hacer estos municipios más que intentar trasladar una parte de sus problemas a los ciudadanos? Ya sea a través de la subida de impuestos o de una nueva ronda de destrucción del patrimonio público (suelo, empresas y servicios) la víctima será, una vez más, el interés general. Y lejos de cuestionar la ausencia de herramientas para la gestión democrática del territorio que evidencian las numerosas barbaridades urbanísticas cometidas, los desmanes van a ser premiados con más financiación en forma de transferencias estatales bajo la figura del Fondo de Inversión Local. ¿La trampa? Esta medida no está pensada para pagar las deudas que acumulan muchos ayuntamientos, aliviando la situación de proveedores y demás víctimas del impago público, sino para emprender nuevas obras que se hayan podido suspender por la crisis. ¡Viva la insistencia! la cuestión clave es de nuevo mantener el ciclo. Desde luego, de todos los municipios altamente endeudados, Madrid, gracias a las grandes obras realizadas en los últimos años y especialmente a la nueva red de túneles de la remodelación de la M-30, acumula una deuda de 5.936 millones de euros, a principios de 2009, es decir, casi 2.000 euros por habitante, un 44% más que hace sólo cuatro años. Es significativo que las entidades bancarias ingresen cada día 750.000 euros en concepto de intereses sobre la deuda madrileña. Parquímetros, impuestos sobre la recogida de basuras y sobre todo “muchacha, mucha austeridad” parecen constituir el programa de salida del agujero.

Respecto a la sostenibilidad del modelo, lo cierto es que Madrid “marca verde” no ha engañado ni siquiera a los más dispuestos. Durante la década gloriosa de crecimiento ininterrumpido los atentados ecológicos se han sumado sin pausa. El desarrollo urbano y la construcción de infraestructuras han ido fragmentando cada vez más la geografía natural hasta reducirla a un conjunto de islas que conservan la etiqueta de “naturaleza” más en calidad de parques urbanos que de espacios naturales. Ejemplos, demasiados. Proyectos absolutamente ilegales (con sentencias judiciales en contra) que acaban saliendo adelante, como el desdoblamiento de la M-501, conocida como la Carretera de los Pantanos. O la futura radial de la A-6, la M-62, todavía en fase previa, pero que necesariamente partirá en dos algunos de los parques naturales del pie de monte serrano. O las autovías que van componiendo, en el extremo del área metropolitana una suerte de M-60 encubierta. O las obras del AVE a Valladolid. O el enterramiento bajo el Monte del Pardo de la M-50. O las 100.000 viviendas previstas en la sierra de Guadarrama, garantía de la calidad del aire y del agua de Madrid, vendida como “atracción verde” para aquellas familias con posibles que quieren

instalarse en el “campo”. Y, por supuesto, en tiempos de crisis el ritmo de construcción no debe ser interrumpido; antes al contrario, es ahora cuando los “prejuicios ecologistas” deben ser eliminados en aras de un “bien mayor”, en palabras de la presidenta: “La población es más importante que el planeta”. La misma actitud de desprecio por la conservación del poco patrimonio natural que sobrevive en un espacio sobresaturado de infraestructuras se ha dejado notar también en las políticas de privatización y externalización de los dispositivos de prevención y conservación. Es el caso del cuerpo de bomberos forestales, los retenes de verano o la previsible privatización del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), amén de la reducción de competencias de los guardias forestales.

La crisis y los graves riesgos de fractura social que conlleva pueden abrir posibilidades para un verdadero cambio de rumbo: la reinención del vínculo social y reactualizar el “derecho a la ciudad”

Otra cuestión a tratar es el abastecimiento de agua, donde el límite parece haberse sobrepasado ya con creces. Cada verano se barajan las más peregrinas “soluciones”: explotar los acuíferos e inyectarles agua en épocas de abundancia, bombardear las nubes con yoduro de plata para que “llueva a gusto”, construir nuevos embalses... Obviamente, nadie habla de los 33 campos de golf de la Comunidad que consumen tanta agua como medio millón de habitantes o de los nuevos desarrollos urbanísticos dispersos en los que sólo el mantenimiento de la presión de la red consume tanta agua como el municipio de Madrid. Esto no debe ser tocado. Es mejor pensar en la privatización del Canal de Isabel II, aunque esta empresa pública sea completamente rentable. Del mismo modo, poco se piensa sobre la situación energética de la Comunidad. En un territorio caracterizado por una enorme dependencia exterior (que ronda casi el 100%) y por un consumo en continuo crecimiento (un 91% en los últimos trece años, del que casi el 70% se deriva del petróleo) y mientras que algo más de la mitad del consumo energético (el 52%) se debe al sector del transporte, la política territorial sigue girando en torno a la construcción de nuevas infraestructuras viarias y favoreciendo la urbanización dispersa, que generará una mayor necesidad de desplazamientos. En el sureste de la Comunidad, donde ya están las graveras, las grandes depuradoras y la incineradora, se planifican hasta siete centrales térmicas para hacer frente a la creciente demanda energética. De hecho, en todo este capítulo se debería reconocer que al lado de todas las geografías de la desigualdad que se han descrito en este texto, hay otra más, la geografía ecológica. Una geografía en la que el norte y el oeste, las grandes concentraciones suburbanas, disfrutan todavía de un paisaje verde y un aire aparentemente sano (si bien ambos cada vez más degradados) y una geografía en la que el sur y el este tendrán que conformarse con los paisajes industriales, tan familiares en su historia, así como con las nuevas infraestructuras de desecho del metabolismo urbano.

Como conclusión

Lo más sorprendente de este recorrido es que el modelo que hemos presentado se ha gestado no a partir de una mera “inhibición” del Estado, como si fuera la conclusión natural de la libertad de mercado, sino que ha sido el producto de las políticas de unas administraciones (tanto de Aguirre como anteriores) activas y agresivas. Su presunto “liberalismo” ha requerido fuertes dosis de intervención pública, a través de la legislación y de la permanente transferencia de dinero público a unos pocos; estamos ante una verdadera ruptura con el modelo del Estado del Bienestar que hace que, ante la crisis y dada la polarización social, la población esté en una situación de mayor fragilidad. Estaba claro que un crecimiento basado en el sector inmobiliario y la construcción, y financiado gracias a unos niveles de crédito nunca vistos, era una apuesta de riesgo que más tarde o más temprano iba a terminar en batacazo. Pero tampoco parece que la crisis vaya a traducirse en ningún cambio de orientación del modelo; al contrario, probablemente ahondará en una nueva oleada de privatizaciones y de políticas procrecimiento. Sin embargo, la crisis y los graves riesgos de fractura social que conlleva pueden abrir posibilidades para un verdadero cambio de rumbo: cuando la insistencia en el modelo anterior es sólo la repetición del mismo reparto injusto de la renta y los recursos, la multiplicación de los conflictos que apuntan al núcleo del modelo de acumulación –vivienda, precariedad del empleo, externalización de servicios públicos, sobreexplotación de espacios públicos y territorio, presencia de los migrantes– se presenta como el momento crítico para la reinención del vínculo social, la gran oportunidad para reactualizar ese viejo “derecho a la ciudad” que animó las revueltas urbanas de los años sesenta y setenta. Lo que suceda está sencillamente en nuestras manos.